JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, diecisiete de mayo de dos mil veintidós

Proceso: ordinario
Radicados: 05001310300920100049900
Providencia: No repone aprueba costas

1. ANTECEDENTES

Mediante auto del pasado 28 de marzo, se aprobaron las costas del presente proceso (Cfr. archivo 08, C1). En dicha liquidación se tuvo en cuenta la suma de \$20.009.300,00, por concepto de agencias en derecho fijadas en la sentencia de 9 de marzo de 2020 (Cfr. archivo01, C1, pág. 1044), así como las agencias en derecho dispuestas en segunda instancia por valor de \$ 1.000.000,00 (Cfr. archivo27, pág. 1, C5), ambas a favor de la parte demandada y a cargo de la parte demandante y cesionario.

Inconforme con la decisión adoptada en dicha providencia, la parte demandada interpuso recurso de reposición y en subsidio, argumentando en síntesis que, las pretensiones negadas ascendían como mínimo a \$1.650.881.903,00 y de conformidad con el numeral 1.1 del art. 6° del Acuerdo 1887 de 2003 del C.S. de J, las agencias en derecho para el proceso que nos ocupa podían ascender en primera instancia hasta el 20% de lo negado y en segunda hasta el 5% de las pretensiones, esto es, a \$330.176.380,00 y \$82.544.095,00, respectivamente; pese a ello se fijaron en primera instancia en 1.2% y en segunda en 0.06%), lo que desconoció la dificultad de la actividad probatoria, los alegatos de conclusión presentados, la duración del proceso y la complejidad de las normas aplicables en el caso concreto, motivo claros para solicitar el aumento de las agencias en derecho.

2. CONSIDERACIONES

2.1 Anotación preliminar. En atención a lo preceptuado en el párrafo del artículo 9 del Decreto 806 de 2020, dado que el apoderado de los demandados acreditó haber enviado el escrito mediante el cual formuló impugnación contra la providencia de 28 de marzo de 2022 a la parte demandante, se prescindió del traslado secretarial del recurso formulado.

2.2. El Código General del Proceso en su artículo 365 establece que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión, un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, además, en los casos especiales previstos en la mencionada normatividad. Norma de la que se desprende que las costas constituyen un resarcimiento a los gastos en que debió incurrir el litigante que salió avante en el proceso para defender sus intereses.

Las costas procesales se componen tanto por las expensas como por las agencias en derecho. Las primeras *“son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los aranceles, entre otros”*¹ y las segundas

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-625 de 11 de noviembre de 2016 M.P María Victoria Calle Correa

*“corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce **discrecionalmente** a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el artículo 366 del Código General del Proceso, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado”² (Negrilla fuera de texto).*

En lo referente a la liquidación de las costas, establece el numeral 4 del artículo 366 *ibidem* que *“Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”* Luego, el grado de discrecionalidad con cuenta el Juez no debe convertirse en arbitrariedad, de allí que para establecer las agencias en derecho se deban tener en cuenta diversos factores.

Por su parte, el Acuerdo no. 1.887 de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 de 200, por el cual se establecen las tarifas de las agencias en derecho, aplicable al presente asunto por haber sido instaurada la demanda con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 –artículo 7-, en su artículo 3° señala que *“El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”*

Seguidamente, en su artículo 6, numeral 1.1, dispone que en los procesos ordinarios como el *sub judice*, en primera instancia las tarifas de las agencias en derecho serán *“hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.”* y en segunda instancia *“Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia”*

2.2 Caso concreto. En el asunto *sub examine* el recurrente soporta su reproche principalmente en que el porcentaje en que fijaron las agencias en derecho, a saber, 1.2% de las pretensiones primera instancia y 0.06% en segunda, resulta muy bajo de cara a la exigente actividad probatoria, alegatos de conclusión, duración y complejidad del proceso.

Para el presente asunto se observa que el demandante formuló pretensiones de contenido pecuniario, que permiten enmarcar el presente asunto en un proceso ordinario de mayor cuantía, en tanto, se solicitó condenar a los demandados al pago de perjuicios por total valor de 1.633.319.617,00, de acuerdo con las sumatoria de las pretensiones esgrimidas en los numeras 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 que corresponde a un total de 667.366.868,00 resultante de multiplicar la cantidad de meses reclamados por el canon indicado, 2,7 y 2,8, más los intereses o indexación. Es por ello que, al acudir a las tarifas fijadas en el Acuerdo no. 1.887 de 2003, artículo 6, numeral 1.1, las agencias en derecho podían ser fijadas hasta en el 20% de lo pretendido, en consecuencia, puede colegirse sin mayores

² *Ibidem.*

esfuerzos que los \$20.009.300,00 fijados como agencias en derecho, se encuentran dentro del margen legamente permitido.

Y es que no puede perderse de vista que la aludida norma consagra un tope máximo de 20% en primera instancia y 5%, de lo que se desprende que las agencias en casos como el que hoy nos ocupa puede corresponder desde el 0% hasta 20% o 5%, respectivamente.

Con la fijación de un monto mínimo y máximo se da un margen de discrecionalidad y maniobrabilidad al Juzgador, por lo que, analizada de manera conjunta la naturaleza del proceso, calidad, duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado del extremo resistente, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, surge razonable fijar las agencias en derecho en el 1.225% del valor de las pretensiones en primera instancia.

Aunado a ello, con el fin de evaluar si el porcentaje señalado por la gestión del mandatario judicial de la parte demandada, resulta proporcionada de conformidad con los parámetros enunciados dentro de esta providencia, debe decirse que la actuación de la referida parte tuvo lugar desde el mes de abril de 2011 (archivo01, C1, pág. 324), fecha en la que contestó la demanda, sin embargo no puede pasarse por alto que la demanda se tuvo por no contestada al haberse presentado esta de manera extemporánea (archivo01, C1, pág. 370), aspecto que resulta significativo de cara a análisis de lo que reclama el impugnante.

De tal forma, no se encuentra acreditado que el apoderado del demandado haya debido desplegar una gestión especial para defender a su representado, ni se acudió a una alta actividad probatoria o a medios de prueba particularmente complejos para desestimar afirmaciones en las que se sustentaba la demanda, máxime cuando la demanda, se itera, se tuvo por no contestada. Tampoco la alta suma reclamada implicará *per se* mayor dificultad en la defensa, de modo que no puede sostenerse que hay lugar a incrementar las agencias en derecho.

Sumado a ello, no puede pasarse por alto lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo no 1.887 de 2003, a saber, “(...)Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.”. La proporción inversa implica que entre más alto sea el valor de las pretensiones más bajo o reducido deberá ser el porcentaje a aplicar para la fijación de las agencias en derecho, es decir, a mayor cuantía de la pretensión menor valor proporcional de las agencias.

Por su parte, en lo relativo a las agencias en derecho fijadas en segunda instancia, debe advertirse que no es dable modificar la decisión del superior funcional y en todo caso, el porcentaje fijado además de encontrarse dentro de los límites legales, no es susceptible de ser aumentado, por las razones indicadas en precedencia.

En suma, no hay lugar a reponer la decisión cuestionada incrementando el monto señalado por concepto de agencias en derecho, puesto que la misma se compagina con la norma que rige la materia, por lo que, debido a que se interpuso en subsidio el recurso de apelación y al ser el auto que aprueba la liquidación de costas susceptible de tal medio de impugnación, conforme lo dispone el artículo 366 numeral 5 del C.G.P, habrá de

concederse el mismo en el efecto suspensivo, al no existir actuación alguna pendiente al interior del presente trámite.

Por último, no se accede a la entrega de dineros por concepto de costas solicitado por el apoderado de la parte demandada como quiera que la providencia que aprobó la liquidación de estas fue recurrida por dicha parte, motivo por el cual no se encuentra en firme.

En virtud de lo anterior, el **Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín**

RESUELVE:

Primero. No reponer el auto que aprobó la liquidación de costas, calendado 28 de marzo de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído, en consecuencia,

Segundo. Conceder el recurso de alzada impetrado en forma subsidiaria, en el efecto suspensivo por lo que se dispone la remisión del expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, para lo de su competencia.

Tercero.: Negar la solicitud de entrega de dineros por concepto de costas formulado por el demandado.

NOTIFÍQUESE

ALVARO ORDOÑEZ GUZMÁN

JUEZ

6

Firmado Por:

**Alvaro Eduardo Ordoñez Guzman
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 019
Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **10c5161db30e2610ab8280d87e356c80dbeaaf8ce7ba60136ead75d013fbede9**

Documento generado en 17/05/2022 03:32:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>